Editorial: No cruzar la raya

La semana que pasó estuvo marcada por una confrontación sin precedentes.

EDITORIAL

1:20 a.m. | 11 de mayo de 2014

En franca contravía del deseo de la mayoría de los colombianos de presenciar una campaña presidencial a la altura del perfil y las calidades de los contendores y en sintonía con los temas que más afectan a la ciudadanía, la semana que pasó estuvo marcada por una confrontación de un tipo y de una intensidad sin precedentes en la trayectoria democrática del país.

En un muy breve lapso han surgido desde graves acusaciones con serias implicaciones penales hasta ataques que definitivamente no corresponden a la manera y el tono en el que debe darse la justa democrática para ocupar el cargo más importante de la nación. Da una idea del rumbo que esta ha tomado el que en los últimos días los sucesos acontecidos hayan copado las páginas judiciales antes que las reservadas para los asuntos de la política.

Es un hecho, pues, que el debate está igualado por lo bajo. Que la irrupción de las redes sociales ha planteado un nuevo campo de batalla en que parecen diluirse todos los preceptos éticos. El anonimato que estas permiten, así como el tipo de conversación que surge cuando solo se cuenta con 140 caracteres y millones de seguidores, se ha convertido en un detonante de una acelerada degradación de la contienda, de una prevalencia del insulto arrebatado, del señalamiento infundado, sobre los argumentos sopesados, las denuncias adecuadamente sustentadas.

Antes de continuar, hay que ser muy claros en que no se trata de sugerir pasar la página o mirar hacia otro lado ante los indicios de actos delictivos que han emergido en medio del cruce de dardos. Al contrario, como ya se planteó desde estos renglones, el mejor escenario para todos los implicados y para el país es que se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables. Aquí, el balón está en el campo del fiscal general, Eduardo Montealegre. La entidad a su cargo debe arrojar luces tan pronto como sea posible –y con la discreción a que su misión constitucional obliga– sobre las acusaciones hoy en las sombras, para tranquilidad de los involucrados y, sobre todo, para evitar que quien resulte ganador cargue con el lastre que implica dejar interrogantes sin resolver del corte de los que han salido a flote. El país ya conoce muy bien los costos de un gobierno rodeado de cuestionamientos heredados de la campaña.

Y es que, conforme se va desenredando la madeja, aparecen preocupantes señales de que estamos ante una actividad criminal cuidadosamente organizada, que trasciende el plano electoral y que bien podría estar perjudicando otras instancias, como el proceso de paz e, incluso, la misma seguridad nacional. Por no mencionar acciones en redes sociales que, si bien pueden no estar por fuera de la ley, sí están en las antípodas de lo que debe ser una campaña ceñida a los más elementales preceptos éticos.

Lo que procede, entonces, es renovar el llamado a los candidatos para que se comprometan a seguir unos mínimos parámetros de comportamiento, que comienzan por el respeto que merece el adversario. Bueno añadir también que, si en el curso de la justa surgen más evidencias de hechos delictivos, su manejo debe darse en concordancia con el deber que le atañe a todo ciudadano de poner en conocimiento de las autoridades la comisión de un delito y no en función de impulsar estrategias de muy dudosa ortografía. Las campañas tienen la responsabilidad con el país de valorar tal tipo de situaciones desde la perspectiva adecuada.

Esto último es central y tiene que ver también con el escenario de creciente polarización del debate público, que no puede ser ignorado. Caminar sobre este campo minado simplemente refuerza la obligación que recae sobre los contendores de no morder el anzuelo de la agudización de esta situación en beneficio de sus aspiraciones. Dicho coloquialmente: sacudir el avispero, patear el tarro, puede reportarles dividendos a muy corto plazo, pero deben estar seguros de que obrar así les pasará factura a mediano plazo, en términos de mayor dificultad para lograr el mínimo consenso necesario que lleve a feliz término su plan de gobierno, por no hablar de lo inaceptable que resulta hacer política a costillas de la descomposición del tejido social.

En esta misma línea, hay que calificar como lamentable el que, como lo han señalado ya algunos analistas, se esté abandonando ese marco de respeto entre los aspirantes, llegada la hora de las elecciones, que hasta hoy había caracterizado a esta democracia. Quienes tienen en sus manos la potestad de definir los términos de este debate deben tener muy presente que una historia tan llena de pugnas políticas, con rastro de sangre y barbarie, simplemente no puede darse ese lujo.

Todo se reduce, en últimas, a que quien se ciña la banda tricolor el próximo 7 de agosto será el Presidente de todos los colombianos. El escenario de ánimos caldeados, división y marcada polarización que dejaría la campaña, de no corregirse el rumbo a tiempo, hará que el próximo mandatario sea factor de división antes que de cohesión en torno a unos parámetros cuyo respeto había marcado el límite de lo permitido en la política. Cruzar esa raya es ablandar el terreno sobre el que se levantan los pilares de una democracia que, con sus altas y bajas, es preferible a cualquier otra opción, sobre todo las que se levantan sobre el carisma de un caudillo.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com.co